

No. 33863

**SPAIN
and
LEBANON**

Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Madrid on 22 February 1996

Authentic texts: Spanish and English.

Registered by Spain on 25 June 1997.

**ESPAGNE
et
LIBAN**

Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements. Signé à Madrid le 22 février 1996

Textes authentiques : espagnol et anglais.

Enregistré par l'Espagne le 25 juin 1997.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA LIBANESA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES

El Reino de España y la República Libanesa, en adelante "las Partes Contratantes",

deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países,

proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, y

reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO I
DEFINICIONES**

A los efectos del presente Acuerdo,

1. El término "inversor" se refiere, con relación a cualquiera de las Partes Contratantes, a:

a) personas físicas que sean nacionales de una de las Partes Contratantes con arreglo a su legislación.

b) personas jurídicas, incluidas compañías, corporaciones, asociaciones de compañías, sucursales y otras organizaciones que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte Contratante y que tengan su sede, junto con actividades económicas efectivas, en el territorio de esa misma Parte Contratante.

2. El término "inversiones" designa todo tipo de activos y en particular, aunque no exclusivamente:

a) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades;

b) activos monetarios o derechos a cualquier prestación que tenga un valor económico;

- c) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, derechos de prenda y derechos similares;
- d) derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo, patentes, licencias de fabricación, nombres comerciales y marcas de comercio, así como procesos técnicos, conocimientos técnicos y fondo de comercio;
- e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos o reinvertidos los activos no afectará su carácter de inversión.

3. El término "rentas de inversión" se refiere a las sumas producidas por una inversión e incluye, en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías y cánones.

4. El término "territorio" designa el territorio terrestre y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el Derecho Internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y conservación de recursos naturales.

ARTICULO II PROMOCION Y ADMISION

1. Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la realización de inversiones en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
2. Con la finalidad de incrementar los flujos de inversión, cada Parte Contratante se esforzará, a petición de la otra Parte Contratante, en informar a esta última de las oportunidades de inversión en su territorio.
3. Cada Parte Contratante concederá las autorizaciones necesarias en relación con estas inversiones y permitirá, en el marco de su legislación, la ejecución de permisos de trabajo y contratos, de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa.
4. Cada Parte Contratante concederá también, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o expertos contratados por inversores de la otra Parte Contratante, sin tener en cuenta su nacionalidad.
5. El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversores de una Parte Contratante en

el territorio de la otra Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de esta última.

ARTICULO III PROTECCION

1. Las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante deberán recibir en todo momento un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes deberá, en ningún caso, otorgar a tales inversiones un tratamiento menos favorable que el requerido por el Derecho Internacional.
2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute, extensión, venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación que hubiere contraído en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.

ARTICULO IV TRATAMIENTO NACIONAL Y CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA

1. Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones o rentas de inversión de inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las inversiones o rentas de inversión de inversores de cualquier tercer Estado.
2. Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte Contratante pueda conceder a los inversores de un tercer Estado, en virtud de su asociación o participación actual o futura en una zona de libre cambio, una unión aduanera, un mercado común o en virtud de acuerdos internacionales o asociaciones de Estados similares de los que cualquiera de las Partes Contratantes sea o llegue a ser Parte.
3. El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no obligará a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier privilegio, deducción fiscal, exención u otros privilegios análogos que haya otorgado a inversores de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación o en virtud de cualquier legislación interna relacionada total o parcialmente con tributación.
4. Cada Parte Contratante aplicará, conforme a su legislación, a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.

ARTICULO V NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

1. Las inversiones y rentas de inversión de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida que tenga un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante "expropiación") excepto por razones de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago al inversor de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.
2. La indemnización será equivalente al justo valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la medida de expropiación se haga pública, lo que suceda antes. La indemnización incluirá el pago de intereses a un tipo comercial normal hasta el día del pago, se abonará sin demora, en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible.
3. El inversor afectado tendrá derecho, de acuerdo con la Ley de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión de su caso por parte de la autoridad judicial u otra autoridad competente de dicha Parte Contratante, para determinar si la expropiación y el monto de la indemnización se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo.
4. Si una Parte Contratante expropiara los activos de una empresa constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su territorio, en la cual existe participación de inversores de la otra Parte Contratante, deberá asegurar que las disposiciones de este Artículo se apliquen de manera que se garantice el pago a dichos inversores de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

ARTICULO VI COMPENSACION POR PERDIDAS

1. A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, insurrección o disturbio civil u otras circunstancias similares, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que aquél que la última Parte Contratante conceda a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable al inversor afectado.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, a los inversores de una Parte Contratante que, en cualquiera de las situaciones señaladas en dicho apartado, sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte Contratante a consecuencia de:
 - a) la requisición de sus inversiones o de parte de sus inversiones por las fuerzas o autoridades de la última Parte Contratante; o

b) la destrucción de sus inversiones o de parte de sus inversiones por las fuerzas o autoridades de la última Parte Contratante, no requerida por la necesidad de la situación,

se les concederá por dicha Parte Contratante una restitución o compensación pronta, adecuada y efectiva.

3. Cualquier pago hecho de acuerdo con este Artículo será libremente transferible.

ARTICULO VII TRANSFERENCIA

1. La Parte Contratante en cuyo territorio los inversores de la otra Parte Contratante hayan realizado inversiones garantizará la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

- a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento o ampliación de la inversión;
- b) las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el Artículo I;
- c) las compensaciones previstas en los Artículos V y VI;
- d) los fondos para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión;
- e) el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión;
- f) los sueldos y demás remuneraciones del personal contratado en el exterior en relación con una inversión;
- g) los pagos derivados de la solución de controversias.

2. La Parte Contratante receptora de la inversión facilitará al inversor de la otra Parte Contratante el acceso al mercado de divisas en forma no discriminatoria, a fin de que el inversor pueda adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente Artículo.

3. Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán sin demora, en moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado vigente el día de la transferencia.

4. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas transferencias sin demora. En particular, no deberá transcurrir más de un mes desde la fecha en que el inversor haya presentado la solicitud necesaria para efectuar la transferencia hasta la fecha en que dicha transferencia se realice efectivamente.

5. Las Partes Contratantes concederán a las transferencias a que se refiere el presente Artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las transferencias relativas las inversiones de inversores de cualquier tercer Estado.

ARTICULO VIII CONDICIONES MAS FAVORABLES

1. Si de las disposiciones legales de cualquiera de las Partes Contratantes o de las obligaciones, actuales o futuras, emanadas del derecho internacional al margen del presente Acuerdo entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o específica en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá, en la medida en que es más favorable, sobre el presente Acuerdo.

2. Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido acordadas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO IX SUBROGACION

En el caso de que una Parte Contratante o la agencia por ella designada realizara un pago en virtud de una indemnización, garantía o un contrato de seguro otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por cualquiera de sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la subrogación de cualquier derecho o título de dicho inversor en favor de la primera Parte Contratante o de la agencia por ella designada y el derecho de la primera Parte Contratante o de la agencia designada a ejercer en virtud de la subrogación cualquier derecho o título en la misma medida que su anterior titular.

ARTICULO X SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo será resuelta por vía diplomática.

2. Si las Partes Contratantes no pudieran alcanzar un acuerdo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, la controversia será sometida, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje

compuesto por tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán al presidente que será un ciudadano de un tercer Estado.

3. Si en el plazo de dos meses una de las Partes Contratantes no hubiera designado a su árbitro y, no hubiera atendido la invitación de la otra Parte Contratante para realizar dicha designación, el árbitro será designado, a petición de dicha Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

4. Si, transcurridos dos meses desde su nombramiento, los dos árbitros no alcanzaran un acuerdo sobre el nombramiento del presidente, el presidente será designado, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

5. Si, en los casos previstos en los apartados 3 y 4 de este Artículo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función o fuera ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes, la designación se realizará por el Vicepresidente, y si este último no pudiera desempeñar dicha función o fuera ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes, la designación se realizará por el Juez más antiguo de la Corte que no sea ciudadano de ninguna de las Partes Contratantes.

6. El tribunal emitirá su dictamen basándose en el respeto a la ley, a las normas contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, así como también sobre los principios universalmente aceptados de derecho internacional.

7. El tribunal establecerá su propio procedimiento sujeto a las demás disposiciones acordadas por las Partes Contratantes.

8. Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los gastos del Presidente y los demás gastos serán sufragados por partes iguales por ambas Partes Contratantes.

9. Las decisiones del tribunal serán definitivas y vinculantes para ambas Partes Contratantes.

ARTICULO XI **CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSORES DE** **LA OTRA PARTE CONTRATANTE.**

1. Toda controversia que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto a lo regulado por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible, las partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2. Si la controversia no pudiera resolverse amigablemente en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida a elección del inversor:

- al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión;
- a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional;
- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de Marzo de 1965, en el caso de que ambas Partes Contratantes se hayan adherido al mismo. En caso de que una de las Partes Contratantes no se hubiera adherido al citado Convenio, la controversia se podrá resolver conforme al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación de la Secretaría del C.I.A.D.I.

3. La solución de cualquier controversia se basará en:

- las disposiciones del presente Acuerdo y en las de otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes;
- las reglas y los principios universalmente aceptados de Derecho Internacional;
- el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de Ley,

4. La Parte Contratante que sea parte en la controversia no podrá hacer valer como defensa, reconvención o por cualquier otra razón, el hecho de que el inversor haya recibido o vaya a recibir, en virtud de un contrato de seguro, de indemnización o de garantía, la indemnización u otra compensación por el total o parte de las pérdidas sufridas.

5. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

ARTICULO XII ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA, DENUNCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales

han sido cumplimentadas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se renovará, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años.

2. Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

3. Con respecto a las inversiones realizadas o adquiridas con anterioridad a la fecha de denuncia del presente Acuerdo y a las que por lo demás éste sea aplicable, las disposiciones de todos los restantes artículos de este Acuerdo seguirán estando en vigor por un período adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en dos originales en lengua española e inglesa, siendo ambos textos igualmente auténticos en Madrid, a 22 de febrero de 1996.

Por el Reino
de España:

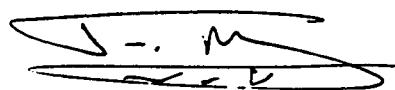
“a.r.”



CARLOS WESTERDORP
Ministro de Asuntos Exteriores

Por la República
Libanesa:

“a.r.”



FARES BOUEZ
Ministro de Asuntos Exteriores

AGREEMENT¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE LEBANESE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Kingdom of Spain and the Lebanese Republic, hereinafter referred to as "The Contracting Parties",

desiring to intensify their economic cooperation for the mutual benefit of both countries,

intending to create favourable conditions for investments made by investors of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

recognizing that the promotion and protection of investments under this Agreement will stimulate initiatives in this field,

have agreed as follows:

ARTICLE I DEFINITIONS

For the purposes of the present Agreement,

1. The term "investor" refers with regard to either Contracting Party to:

- a) natural persons who, according to the law of that Contracting Party, are considered to be its nationals;
- b) legal entities, including companies, corporations, business associations, branches and other organizations incorporated or constituted, or otherwise, duly organized under the law of that Contracting Party and having their seat, together with real economic activities in the territory of that same Contracting Party.

2. The term "investments" shall include every kind of assets and particularly, but not exclusively:

- a) shares in and stocks and debentures of a company, or any other form of participation in a company;

¹ Came into force on 29 April 1997 by notification, in accordance with article XII.

- b) claims to money or to any activity having an economic value;
- c) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, pledges and similar rights;
- d) industrial and intellectual property rights, including patents, licences, trademarks and tradenames, as well as technical processes, know-how and goodwill;
- e) rights to engage in economic and commercial activities conferred by law or by virtue of a contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

Any change of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their nature as an investment.

3. The term "returns" means amounts yielded by an investment and includes, in particular, though not exclusively, profits, dividends, interests, capital gains, royalties and fees.

4. The term "territory" designates the land territory and territorial waters of each of the Contracting Parties, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extends outside the limits of the territorial waters of each of the Contracting Parties, over which they have or may have jurisdiction and sovereign rights for the purposes of exploitation, exploration and conservation of natural resources, pursuant to international law.

ARTICLE II PROMOTION AND ADMISSION

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. In order to encourage mutual investments flows, each Contracting Party shall endeavour to inform the other Contracting Party, at the request of the latter Contracting Party, on the investment opportunities in its territory.

3. Each Contracting Party shall grant the necessary permits relating to these investments and shall allow, within the framework of its law, the execution of work permits and contracts related to manufacturing—licences and technical, commercial, financial and administrative assistance.

4. Each Contracting Party shall also grant, whenever necessary, the permits required in connection with the activities of consultants or experts engaged by investors of the other Contracting Party, regardless of their nationality.
5. This Agreement shall also be applicable to Investments made in the territory of a Contracting Party, in accordance with its laws and regulations, by investors of the other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement.

ARTICLE III PROTECTION

1. Investments of investors of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security. In no case shall a Contracting Party accord to such investments treatment less favourable than that required by international law.
2. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale, and if it is the case, the liquidation of such investments. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party.

ARTICLE IV NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED NATION TREATMENT

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments or returns of investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than that which it accordss to investments or returns of investors of any third State.
2. However, this treatment shall not extend to the privileges which either Contracting Party may grant to investors of a third State by virtue of its membership of, or association with, any existing or future free trade area, customs union, common market or similar international agreements or associations of States to which either of the Contracting Parties is or may become a Party.
3. The treatment given pursuant to this article shall not oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any privilege, tax deduction, exemption or other similar privileges granted by either of the Contracting Parties to investors of third countries by virtue of a double-taxation agreement or any other taxation agreement or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

4. Each Contracting Party shall apply, under its own law, no less favourable treatment to the investments of investors of the other Contracting Party than that granted to its own investors.

ARTICLE V NATIONALIZATION AND EXPROPRIATION

1. Investments and returns of investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having an equivalent effect to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") except for public interest, pursuant to the law, in a non discriminatory manner and against the payment to the investor of a prompt, adequate and effective compensation.
2. Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or impending expropriation became public knowledge, whichever is first. Compensation shall include interest at a normal commercial rate until the date of payment, shall be paid without delay in a freely convertible currency, be effectively realizable and freely transferable.
3. The investor concerned shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review by a judicial or other competent authority of that Contracting Party of its case to determine whether such expropriation and any compensation therefor conforms to the principles set out in this Article.
4. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of this Article are applied so as to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

ARTICLE VI COMPENSATION FOR LOSSES

1. Investors of one Contracting Party whose investments or returns in the territory of the other Contracting Party suffer losses due to war or to other armed conflict, revolution, state of national emergency, insurrection, civil disturbance or any other similar event, shall be accorded by the latter Contracting Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable to the investor concerned.

2. Notwithstanding paragraph 1), an investor of a Contracting Party which, in any of the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the territory of another Contracting Party resulting from

- a) requisitioning of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities; or
- b) destruction of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded by the latter Contracting Party restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective.

3. Any payment made under this Article shall be freely transferable.

ARTICLE VII TRANSFER

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant the free transfer of the payments relating to these investments, particularly but not exclusively the following:

- a) the initial capital and additional amounts needed for the maintenance or increase of an investment;
- b) investment returns, as defined in Article I;
- c) compensations provided for under Articles V and VI;
- d) funds in repayment of loans related to an investment;
- e) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;
- f) earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with an investment;
- g) payments arising out of the settlement of a dispute.

2. The recipient Contracting Party of the investment shall allow the investor of the other Contracting Party to have access to the foreign-exchange market in a non-discriminatory manner so that the investor may purchase the necessary foreign currency to make the transfers pursuant to this article.

3. Transfers under the present Agreement shall be made without delay in a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of transfer.

4. The Contracting Parties undertake to facilitate the procedures needed to make these transfers without delay. In particular, no more than one month must elapse from the date on which the investor submits the necessary applications in order to make the transfer until the date the transfer actually takes place.

5. The Contracting Parties shall accord to transfers referred to in the present Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originated from investments made by investors of any third State.

ARTICLE VIII MORE FAVOURABLE TERMS

- 1. If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.**
- 2. More favourable terms than those of this Agreement which have been agreed to by one of the Contracting Parties with investors of the other Contracting Party shall not be affected by this Agreement.**

ARTICLE IX SUBROGATION

In case one Contracting Party or its designated agency makes a payment under an indemnity, guarantee or contract of insurance against non-commercial risks given in respect of an investment made by any of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the assignment of any right or claim of such investor to the first Contracting Party or its designated agency and the right of the first Contracting Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation any such right and claim to the same extent as its predecessor in title.

ARTICLE X SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

- 1. Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.**
- 2. If both Contracting Parties cannot reach an agreement within six months from the start of the negotiations, the dispute shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman who shall be a citizen of a third State.**

3. If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
4. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the latter shall be appointed upon the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
5. If, in the cases specified under paragraphs 3 and 4 of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a citizen of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented or if he is a citizen of either Contracting Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not a citizen of either Contracting Party.
6. The tribunal shall issue its decision on the basis of respect for the law, of the rules contained in this Agreement or in other agreements in force between the Contracting Parties, and as well as of the universally accepted principles of international law.
7. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure.
8. Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.
9. The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting Party.

ARTICLE XI DISPUTES BETWEEN ONE PARTY AND INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1. Disputes that may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party with regard to an investment in the sense of the present Agreement, shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the recipient Contracting Party of the investment. As far as possible, the parties concerned shall endeavour to settle these differences amicably.
2. If these disputes cannot be settled amicably within six months from the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute shall be submitted, at the choice of the investor, to:

- the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made;
- an ad hoc court of arbitration established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law;¹
- the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States", opened for signature at Washington on 18 March 1965,² in case both Contracting Parties become signatories to this Convention. As long as a Contracting Party which is party to the dispute has not become a Contracting State of the Convention mentioned above, the dispute shall be dealt with pursuant to the Additional Facility for the Administration of Conciliation Proceedings of the Secretariat of the Centre.

3. The settlement of any dispute shall be based on:

- the provisions of this Agreement and of the other agreements in force between the Contracting Parties;
- the rules and the universally accepted principles of international law;
- the national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules relative to conflicts of law.

4. The Contracting Party which is a party to the dispute shall not assert as a defence, counterclaim or for any other reason, that indemnification or other compensation for all or part of the alleged damages has been received or will be received by the investor pursuant to an indemnity, guarantee or insurance contract.

5. The arbitration decisions shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national law.

ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE, EXTENSION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties shall have notified each other that the respective constitutional formalities required for the entry into force of international agreements have been completed.

¹ United Nations, *Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 39, Volume I (A/31/39)*, p. 182.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

It shall remain in force for an initial period of ten years and, by tacit renewal, for consecutive periods of two years.

2. Either Contracting Party may terminate this Agreement by prior notification in writing, six months before the date of its expiration.

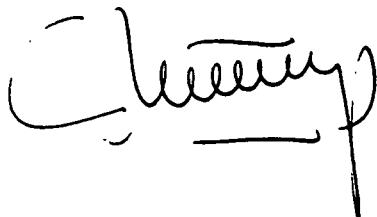
3. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all of the other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period of ten years from such date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.

DONE in two originals in Spanish and in English, each text being equally authentic, in Madrid on February 22, 1996.

For the Kingdom
of Spain:

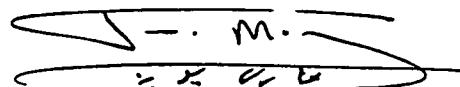
"a.r."



CARLOS WESTERDORP
Minister of Foreign Affairs

For the Lebanese
Republic:

"a.r."



FARES BOUEZ
Minister of Foreign Affairs

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Royaume d'Espagne et la République libanaise, ci-après les « Parties contractantes »,

Désirant intensifier la coopération économique à l'avantage mutuel des deux pays,

Se proposant de créer des conditions favorables aux investissements effectués par des investisseurs de chaque Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante,

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements par la voie du présent Accord stimuleront les initiatives dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression « investisseur » s'entend, par rapport à l'une quelconque des Parties contractantes :

a) Des personnes physiques qui sont des ressortissants d'une Partie contractante en conformité avec sa législation;

b) Des personnes morales, y compris les compagnies, sociétés, associations de compagnies, succursales et autres organisations spécifiquement constituées ou bien, en tout état de cause, régulièrement organisées conformément au droit de cette Partie contractante et qui ont leur siège, avec des activités économiques effectives, sur le territoire de celle-ci;

2. L'expression « investissement » s'entend des avoirs de toute nature, en particulier — mais non limitativement — des suivants :

a) Actions, titres, obligations et autres formes quelconques de participation à des sociétés;

b) Avoirs monétaires ou droits à de quelconques prestations à valeur économique;

c) Biens meubles et immeubles, et autres droits tels qu'hypothèques, nantissements, gages et droits semblables;

d) Droits de propriété intellectuelle ou industrielle, y compris les brevets, licences de fabrication, noms commerciaux et marques de commerce, ainsi que les procédés techniques, les savoir-faire techniques et les fonds de commerce;

¹ Entré en vigueur le 29 avril 1997 par notification, conformément à l'article XII.

e) Droits liés à l'exercice d'activités économiques et commerciales et accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.

Une quelconque modification du mode d'investissement ou de réinvestissement des avoirs n'affecte pas leur caractère d'investissement.

3. L'expression « revenu d'investissement » s'entend des produits d'un investissement et couvre en particulier — mais non limitativement — les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, redevances et honoraires.

4. L'expression « territoire » s'entend du territoire terrestre et la mer territoriale de chacune des Parties contractantes ainsi que de la zone économique exclusive et de la partie du plateau continental qui s'étend au-delà de la limite de leur mer territoriale et sur laquelle elles détiennent ou peuvent détenir, en conformité avec le droit international, une juridiction et des droits souverains aux fins d'exploitation, de prospection et de conservation des ressources naturelles.

Article II

PROMOTION ET ADMISSION

1. Chaque Partie contractante encourage les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et crée des conditions favorables pour ces investissements, et les admet en conformité avec ses dispositions légales.

2. Afin de développer les flux d'investissement, chaque Partie contractante tâche, sur demande de l'autre Partie contractante, d'informer celle-ci des possibilités d'investissement existant sur son territoire.

3. Chaque Partie contractante accorde les autorisations nécessaires pour ces investissements et autorise, dans le cadre de sa législation, l'établissement de permis de travail et de contrats en rapport avec les licences de fabrication et l'assistance technique, commerciale, financière et administrative.

4. Chaque Partie contractante accorde, chaque fois que c'est nécessaire, les autorisations requises pour les activités des consultants ou experts engagés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sans considération de nationalité.

5. Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions légales de cette dernière.

Article III

PROTECTION

1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante doivent, dans tous les cas, bénéficier d'un traitement juste et équitable et jouir d'une protection et d'une sécurité entières. Une Partie contractante ne doit, en aucun cas, accorder à ces investissements un traitement moins favorable que celui prévu par le droit international.

2. Aucune Partie contractante n'entrave de quelque manière que ce soit, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance, l'augmentation, la vente et, le cas échéant, la liquidation de ces investissements. Chaque Partie contractante doit s'acquitter de toute obligation assumée en rapport avec les investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article IV

TRAITEMENT NATIONAL ET CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

1. Chaque Partie contractante assure sur son territoire aux investissements ou revenus d'investissement de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements ou revenus d'investissement d'un quelconque Etat tiers.

2. Toutefois, ce traitement ne s'applique pas aux priviléges qu'une Partie contractante peut accorder aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de son association ou de sa participation actuelles ou futures à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d'accords internationaux ou associations d'Etats similaires auxquels les Parties contractantes participent ou viendraient à participer.

3. Le traitement accordé en conformité avec le présent article n'oblige pas une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante un privilège, une exonération fiscale, une exemption ou d'autres priviléges analogues accordés par elle aux investisseurs de pays tiers en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou bien d'une quelconque disposition législative interne portant en tout ou en partie sur l'imposition.

4. Chaque Partie contractante applique, conformément à sa législation, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs.

Article V

NATIONALISATION ET EXPROPRIATION

1. Les investissements des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante ne font pas l'objet d'une nationalisation, d'une expropriation ou d'une quelconque autre mesure d'effet équivalant à une nationalisation ou expropriation (ci-après « expropriation ») sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions légales, de manière non discriminatoire et avec versement à l'investisseur d'une prompte, adéquate et effective indemnité.

2. L'indemnité équivaut à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation soit prise ou, le cas échéant, avant que la mesure d'expropriation ait été rendue publique. L'indemnité comporte les intérêts à un taux commercial normal jusqu'à la date du paiement, elle est versée sans retard, en monnaie convertible et elle est effectivement réalisable et librement transférable.

3. L'investisseur concerné a droit, en conformité avec la loi de la Partie contractante expropriante, à la prompte révision de son cas par l'autorité judiciaire ou

autre autorité compétente de ladite Partie contractante, afin d'établir si l'expropriation et le montant de l'indemnisation correspondent aux principes établis dans le présent Accord.

4. Dans le cas où une Partie contractante exproprie les avoirs d'une entreprise constituée conformément au droit en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et qui comporte participation d'investisseurs de l'autre Partie contractante, la première Partie contractante doit faire en sorte que les dispositions du présent article s'appliquent de manière à garantir le versement aux investisseurs concernés d'une prompte, adéquate et effective indemnité.

Article VI

INDEMNISATION DES PERTES

1. Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements ou revenus d'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, d'une insurrection ou de troubles civils ou autres circonstances similaires se voient accorder, au titre de la restitution, de l'indemnisation, de la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui accordé par cette autre Partie contractante à ses propres investisseurs ou ceux d'un quelconque Etat tiers, selon ce qui est le plus favorable à l'investisseur dont il s'agit.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les investisseurs d'une Partie contractante qui, en raison de l'une quelconque des situations envisagées dans ledit paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante par suite :

a) De la réquisition totale ou partielle de leurs investissements par les forces armées ou autorités de cette autre Partie contractante,

b) Ou bien d'une destruction totale ou partielle de leurs investissements opérée par les forces armées ou autorités de ladite Partie contractante et non exigée par la situation,

reçoivent de cette autre Partie contractante la restitution ou une compensation prompte, adéquate et effective.

3. Tout paiement fait en conformité avec le présent article est librement transférable.

Article VII

TRANSFERT

La Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont effectué des investissements garantit le libre transfert des paiements en rapport avec ces investissements, en particulier — mais non limitativement :

a) Capital original et montants additionnels afférents au maintien ou au développement de l'investissement;

b) Revenus d'investissement tels que définis à l'article premier;

c) Compensations prévues aux articles V et VI;

- d) Fonds nécessaires au remboursement des prêts liés à un investissement;
 - e) Produit de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, d'un investissement;
 - f) Salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger en rapport avec un investissement;
 - g) Paiements résultant du règlement des différends.
2. La Partie contractante qui admet l'investissement permet à l'investisseur de l'autre Partie contractante d'accéder au marché des changes de manière non discriminatoire afin qu'il puisse se procurer les devises requises pour opérer les transferts couverts par le présent article.
3. Les transferts visés dans le présent Accord se font sans retard, en monnaie librement convertible au taux de change du marché en vigueur le jour du transfert.
4. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les procédures requises de manière que les transferts puissent s'effectuer sans retard. En particulier, il ne doit pas s'écouler plus d'un mois entre la date à laquelle l'investisseur a présenté la demande requise pour effectuer le transfert et la date de la réalisation effective du transfert.
5. Les Parties contractantes conviennent d'accorder aux transferts visés au présent article un traitement non moins favorable que celui accordé pour les transferts en rapport avec des investissements d'investisseurs d'un quelconque Etat tiers.

Article VIII

CONDITIONS PLUS FAVORABLES

1. Si les dispositions juridiques de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations, actuelles ou futures, découlant du droit international en sus du présent Accord entre les Parties contractantes comportent une réglementation générale ou particulière en vertu de laquelle il doit être accordé aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, cette réglementation prévaut sur les dispositions de ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.
2. Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui ont pu être convenues par une Partie contractante avec les investisseurs de l'autre Partie contractante ne sont pas affectées par le présent Accord.

Article IX

SUBROGATION

Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme qu'elle a désigné fait un paiement en vertu d'une indemnisation, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance contre les risques non commerciaux en rapport avec un investissement effectué par l'un quelconque de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci reconnaît la subrogation de la première Partie contractante ou de l'organisme désigné à tout droit ou titre de cet investisseur et le droit de la première Partie contractante ou de l'organisme désigné à faire valoir en vertu de la subrogation tout droit ou titre dans la même mesure que son précédent détenteur.

*Article X***RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES**

1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord est réglé par la voie diplomatique.
2. Si les Parties contractantes ne peuvent pas parvenir à un accord dans le délai de six mois après le début des négociations, le différend est soumis, sur demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres choisissent le président, qui sera un citoyen d'un Etat tiers.
3. Si, dans le délai de deux mois, une Partie contractante manque à désigner son arbitre et ne donne pas suite à l'invitation que lui a faite l'autre Partie contractante de procéder à cette désignation, l'arbitre est désigné, sur demande de cette autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
4. Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nomination du président, celui-ci est désigné, sur demande de l'une ou l'autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
5. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d'exercer la fonction susvisée ou bien est un citoyen d'une Partie contractante, la désignation est faite par le Vice-Président, et si lui-même est empêché ou est un citoyen d'une Partie contractante, elle est faite par le juge venant à sa suite par ordre d'ancienneté et qui n'est pas un citoyen d'une Partie contractante.
6. Le tribunal arbitral rend sa décision en se fondant sur le respect du droit, des normes contenues dans le présent Accord ou dans les autres accords en vigueur entre les Parties contractantes, ainsi que sur les principes universellement acceptés du droit international.
7. Le tribunal arrête lui-même sa procédure sous réserve des autres dispositions convenues entre les Parties contractantes.
8. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de l'arbitre désigné par elle et ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du président et les autres frais sont pris en charge à parts égales par les deux Parties contractantes.
9. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.

*Article XI***DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE ET DES INVESTISSEURS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE**

1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante en rapport avec les dispositions du présent Accord est notifié par écrit par l'investisseur, avec renseignements détaillés à l'appui, à la Partie contrac-

tante qui a admis l'investissement. Dans la mesure du possible, les parties au différend tâchent de régler les contestations par accord amiable.

2. Si le différend ne peut pas être réglé à l'amiable dans le délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe 1 ci-dessus, il est, au choix de l'investisseur, soumis :

- Au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;
- A un tribunal arbitral *ad hoc* constitué en vertu du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international¹;
- Au Centre international pour les règlement des différends en matière d'investissement (CIRDI) institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissement entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965², si les deux Parties contractantes y ont accédé. Dans le cas où une Partie contractante n'a pas accédé à la Convention, le différend peut être dans le cadre du Mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du CIRDI.

3. Le règlement de tout différend est fondé :

- Sur les dispositions du présent Accord et des autres accords en vigueur entre les deux Parties contractantes;
- Sur les règles et principes du droit international universellement acceptés;
- Sur le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

4. Une Partie contractante qui est partie au différend ne peut invoquer à titre de défense, de demande reconventionnelle ou à tout autre titre le fait que l'investisseur concerné a reçu ou va recevoir, en vertu d'un contrat d'assurance, d'indemnisation ou de garantie, une indemnité ou autre compensation correspondant à tout ou partie des pertes subies.

5. Les décisions arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article XII

ENTRÉE EN VIGUEUR, PROROGATION, DÉNONCIATION

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises de leur part pour l'entrée en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur pour une durée initiale de dix ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes consécutives de deux ans.

2. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit de six mois avant la date envisagée pour l'expiration.

¹ Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément no 39*, volume 1 (A/31/39), p. 200.

² Nations Unies, *Recueil des Traité*, vol. 575, p. 159.

3. S'agissant des investissements effectués ou acquis avant la date de la dénonciation du présent Accord et des investissements et de ceux auxquels l'Accord est applicable par ailleurs, les dispositions de tous les autres articles de l'Accord continueront d'avoir effet pendant une période additionnelle de dix ans à compter de la date de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT en deux originaux en espagnol et anglais, les deux textes faisant également foi, à Madrid, le 22 février 1996.

Pour le Royaume
d'Espagne :

a.r.

Le Ministre des affaires étrangères,
CARLOS WESTERDORP

Pour la République
libanaise :

a.r.

Le Ministre des affaires étrangères,
FARES BOUEZ

